

El nuevo eudalismo grario

Percy Schmeiser, como otros agricultores, muestra los peligros de la agricultura industrial promovida por las multinacionales de los transgénicos

Por Robert Schubert

De la misma manera que miles de otros agricultores en el sur de Alemania a finales del siglo XIX, Karl y Anna Schmeiser trabajaban duro en los latifundios de un terrateniente para tener un techo sobre sus cabezas y comida sobre la mesa. El latifundista poseía la tierra, los animales de tiro, el equipo y la mayor parte de la cosecha, más o menos como los señores feudales de la Edad Media. Como otros muchos, Karl y Anna soñaron con una vida mejor, y en 1890 vendieron todo y dejaron Alemania para siempre, embarcando hacia Estados Unidos. Buscando tierras baratas e independencia, se trasladaron al norte a las praderas de Canadá occidental, instalándose en Saskatchewan en 1904.

Un siglo después, la tierra ya no es tan barata. La independencia que Karl y Anna encontraron también está en peligro, como descubrieron su nieto Percy Schmeiser y su esposa Louise en 1998. Fue entonces cuando la multinacional Monsanto los demandó después de que sus semillas de colza fueran contaminadas por los genes resistentes a un herbicida patentado por la multinacional.

El caso generó titulares en todo el mundo, y un incierto futuro para muchos agricultores. Aunque los Schmeiser no tuvieron que pagar a Monsanto, los

tribunales los encontraban culpables de violación de la patente. El hecho de que una multinacional persiga a los pequeños agricultores es muy preocupante para muchos, e indica la profundidad y la amplitud de la tremenda transformación de las últimas décadas: la constante erosión de la práctica de los agricultores de guardar y desarrollar semillas. “Ni yo ni mis padres o abuelos podíamos imaginar que los agricultores perderíamos el control de nuestras semillas”, dice Schmeiser.

Además, esa es sólo la punta del tallo de la colza. La privatización de las semillas es sólo una parte de la firme consolidación del poder económico de unas pocas multinacionales sobre toda la agricultura. Las grandes multinacionales se han asegurado el control sobre todas las fases del ciclo de cultivo: poseen las semillas y las patentes de éstas, controlan las instalaciones de transformación, dominan la comercialización y la distribución, e incluso la financiación de las operaciones de los agricultores. Es como si los viejos señores hubieran resucitado de la tumba, trayendo consigo los viejos sistemas feudales. Las sociedades anónimas que controlan las granjas de pollos y cerdos ya han reducido a muchos ganaderos a meros prestadores de trabajo, y los agricultores de cereales como Percy Schmeiser parecen tener el mismo destino.

Patentar los beneficios

Hasta hace poco en sus 10.000 años de historia, la agricultura era más un modo de vida que una industria. Los agricultores eran los productores de semillas y los guardianes de la herencia de cultivos de las sociedades. Pero a comienzos de 1900s, los gobiernos de Canadá y EE UU comenzaron a promover el desarrollo de grades industrias agrícolas de exportación sobre la base de unos pocos cultivos y animales domésticos. Para maximizar la uniformidad y las cosechas, la reproducción de semillas salió de las granjas hacia los centros públicos centralizados de investigación subvencionada de las universidades de EE UU. El desarrollo de las variedades de semillas se convirtió en una mercancía.

Los avances científicos en los setenta y ochenta anunciaron una nueva era en la agricultura. Para aumentar sus ventas estancadas, Monsanto y otras multinacionales agroquímicas se aventuraron en la ingeniería genética y se transformaron en la industria de la biotecnología. Compraron las empresas tradicionales de semillas y crearon por ingeniería los genes resistentes a sus herbicidas, que introdujeron en las líneas recién adquiridas de semillas. A pesar de ser más baratas, las semillas tradicionales desaparecieron simultáneamente del mercado, y para maximizar los beneficios, la industria necesitaba que los agricultores compraran nuevas semillas todos los años en lugar de guardarlas de un año para otro, como se había hecho durante miles de años.

Era una situación completamente nueva. En el pasado, las instituciones públicas de Norteamérica, que engendraron variedades de semillas, disfrutaron de una cierta protección de la propiedad intelectual bajo la Ley de Protección de Variedades de Plantas de EE UU o la Ley de Derechos de los Mejoradores de Plantas de Canadá. Las instituciones autorizaron a las compañías a que vendieran las semillas a los agricultores, a cambio del pago de unos derechos. Los agricultores estaban autorizados a guardar las sucesivas generaciones de semillas para plantarlas en sus propias granjas. Posiblemente, esto era un sistema más justo, pero poco rentable para las multinacionales de la biotecnología ocupadas en absorber las empresas de semillas.

Las patentes cambiaron esta relación. Los contratos que obligaban a cumplir los derechos de las patentes, proveyeron los medios de control legal sobre las semillas necesarios para incrementar las ganancias. La Oficina de Patentes y Marcas de EE UU empezó primero a conceder patentes para los organismos genéticamente modificados, y después para las semillas transgénicas, en los 1980s y ha concedido más de 2.000 (tanto para las variedades convencionales como transgénicas) desde 1985. El objetivo de Monsanto y otras empresas, según Devlin Kuyek, investigador de la ONG Genetic Resources Action International, era “el control de la propiedad de las semillas para crear nuevos mercados y asegurar su posición en un sistema mundial agroalimentario reestructurado”. Esta transición sólo podía lograrse complemente a través de la conversión de las semillas en una mercancía, “el uso de medios biológicos, como la ingeniería genética, y de medios sociales, como las patentes, para impedir las



Janet Hamlin

Percy Schmeiser

prácticas de guardar las semillas y garantizarse los derechos monopolistas sobre las semillas”. La estrategia ha sido especialmente exitosa para Monsanto, que ya puede controlar no menos del 90 por ciento del germoplasma de los cultivos (el material hereditario, o los genes) en Estados Unidos, según Neil Harl, un catedrático jubilado de economía agrícola en la Universidad Estatal de Iowa. (Monsanto argumenta que los cultivadores tienen la posibilidad de elección, y que cientos de miles de ellos usan la tecnología de la compañía en varios cultivos y están satisfechos).

Los contratos también se usan con variedades de semillas no patentadas. El agricultor de Saskatchewan y escritor Paul Beingessner destaca el caso de dos nuevas variedades públicas de trigo no patentadas. La institución pública que desarrolló la semilla, que es protegida bajo la Ley de Derechos de los Mejoradores de Plantas de Canadá, vendió los derechos a una empresa privada, Quality Assured Seed, autorizándole a vender las semillas a los agricultores. Sin embargo, los agricultores que desean cultivar este trigo deben aceptar contractualmente que no guardarán semillas, y las tendrán que comprar todos los años. Y tienen que vender la cosecha de trigo a Pioneer o a Cargill.

El aumento de la rentabilidad de las semillas durante los pasados 15 años, debido en gran parte a patentes y contratos, coincide con la privatización y el abandono de la investigación por las instituciones públicas. Los agricultores también están guardando menos semillas. Con la introducción de la soja transgénica, por ejemplo, la tasa de semillas de soja guardadas en EE UU cayó del 31 por ciento en 1991 al 10 por ciento una década después (en relación con el área plantada con semillas guardadas de la cosecha anterior), según el catedrático Lawrence Busch de la Universidad Estatal de Michigan, que calculó que el cambio supuso beneficios adicionales. Calcula que el cambio produjo 374 millones de dólares adicionales en ganancias a la industria de semillas en 2001. Percy Schmeiser reconoce que todo el proceso fue muy

rentable para Monsanto. Monsanto patentó la semilla de colza Roundup Ready, una variedad transgénica tolerante al glifosato, el ingrediente activo en el herbicida de la marca Roundup de la compañía. En 1998 (el año en que Monsanto demandó a los Schmeisers), los honorarios de tecnología de Monsanto eran de 15 dólares canadienses por acre (12 dólares de EE UU), las semillas costaban otros 25 dólares canadienses, y el herbicida Roundup 9 dólares canadienses, lo que hace 49 dólares canadienses por acre. Por contra, el cultivador de una variedad convencional pagaba 15 dólares canadienses por acre (5,50 por las semillas y 9 por los agroquímicos). Los gastos totales de Schmeiser eran aún más bajos (5 dólares canadienses) porque guardaba de un año para otro las semillas que él y Louise habían desarrollado durante décadas. En 2003, según Devlin Kuyek, Monsanto ocupaba el tercer lugar en las ventas de plaguicidas (3.100 millones de dólares de EE UU) y el segundo en ventas de semillas (1.600 millones).

Monsanto versus Schmeiser

Así que hay mucho en juego, lo que explica por qué la industria ha reaccionado con tanta agresividad. Para proteger sus genes de Roundup Ready (glifosato) en la soja, maíz, algodón y colza, Monsanto ha investigado a cientos de agricultores por violación de la patente o del contrato. Ha demandado a 90 agricultores en 25 estados federales y ha ganado más de 15 millones de dólares con las sentencias. Según el Centro para la Seguridad de los Alimentos, una ONG con sede en Washington, D.C. Monsanto demandó a los Schmeiser después de que las semillas de su cosecha de colza fueran contaminadas con los genes. Tras perder el juicio y la apelación, Schmeiser, que siempre ha defendido su inocencia, llevó su caso al Tribunal Supremo de Canadá. El pasado mes de mayo el Tribunal Supremo dictaminó que había violado la patente porque los genes estaban presentes en las semillas de su campo de colza.

La decisión reafirmó que mientras los genes y las células son patentables bajo ley canadiense, las semillas, plantas y otras formas de vida superior, no lo son. Obviamente los genes y las células son parte de las semillas y las plantas, lo que puede sugerir que Monsanto esté tratando de extender el alcance de la patente. (El abogado de Schmeiser, Terry Zakreski, defendió ese argumento sin éxito). Pero por una decisión de 5 a 4, los jueces dictaminaron que Schmeiser no debía nada de sus ganancias a Monsanto porque no había obtenido ningún dinero de su invención patentada: "Sus beneficios fueron precisamente los que habría obtenido si hubiera plantado y cosechado colza corriente... No obtuvieron ninguna ventaja agrícola de la resistencia de la colza al herbicida, dado que no rociaron con herbicida Roundup para reducir las malas hierbas. Las ganancias de los recurrentes se deben únicamente a las cualidades de su cosecha que no pueden ser atribuidas a la invención". Sorprendentemente, dado que Schmeiser perdió, el Tribunal Supremo también dictaminó que no tenía que pagar las costas del abogado de Monsanto.

(Todo lo que tuvo que pagar fueron sus costas legales de 400.000 dólares canadienses).

El profesor de derecho agrícola Roger McEowen, el sucesor en el Estado de Iowa de Neil Harl, cree que la sentencia sentó un precedente para futuras defensas en base a la "infracción inocente" que podrán dificultar la habilidad de Monsanto para obtener ingresos de su tecnología. Monsanto refuta esa interpretación. Todo lo que uno debe hacer, dice el portavoz en Canadá de Monsanto Trish Jordan, es leer el párrafo dos de la sentencia para entender que los jueces no estaban preocupados por la violación fortuita o inocente: "Para llegar a esta conclusión, desde el principio señalamos que no estamos preocupados con el descubrimiento inocente por los agricultores del vuelo de plantas patentadas sobre su región o sus cultivos". La clave de la sentencia del Tribunal, según Jordan, es que declaró válida la patente.

Mientras McEowen está de acuerdo en que la violación inocente no era el asunto clave en este caso, destaca que otras circunstancias probablemente habrían cambiado el resultado. Percy Schmeiser se enteró de que las plantas de colza de las cunetas y alrededor de los postes de electricidad cercanos a su propiedad contenían los genes de Monsanto cuando no murieron tras ser rociadas con Roundup, y sin embargo guardó y replantó semillas de su cosecha sin informar a Monsanto. En pocas palabras, "usó" la invención sin permiso, y por lo tanto no es un infractor "inocente". Pero ¿Qué habría sucedido si no hubiera sabido que los genes estaban presentes en su colza (o de saberlo, hubiera llamado a Monsanto inmediatamente), y la multinacional lo hubiera demandado de todos modos?

Parte de la respuesta está en el párrafo que Jordan mencionó, según McEowen: "Los jueces predicen que si los hechos juzgados hubieran sido un caso de violación inocente, el resultado habría sido diferente, y ese punto está reforzado por los términos empleados al señalar la opinión del tribunal. Como consecuencia de este caso, la patente de Monsanto no es tan rigurosa como pensaron. "Este argumento se ve reforzado por otro caso en EE UU, en que un juez de apelación federal usa una hipotética patente de maíz para describir como la facilidad con la que un organismo se reproduce conduce a una inevitable violación de la patente. Teniendo en cuenta estos dos casos, McEowen piensa que Monsanto tendrá que echarse atrás al final, a menos que pueda obtener la evidencia sólida de una violación intencional. Algunos agricultores, por no arriesgarse a ser procesados, firmarán los contratos de usuarios de la tecnología. El resto deberá documentar las compras de semillas y las prácticas de cultivo para mostrar que no violaron la patente deliberadamente.

Opciones de contratación

La consolidación de la agroindustria en semillas, agroquímicos y procesado de la carne es un efecto de la transformación económica estructural producida desde la Segunda Guerra Mundial, que enfatiza el libre comercio mundial. Pero permitir que la consolidación siga sin control dejará al final a los agricultores en manos de unas pocas multinacionales, como



Christopher van Es

las que venden las semillas y les compran sus cultivos o ganados. Cuantos menos compradores haya, más eficazmente pueden fijar precios (una situación de monopolio de demanda), y por supuesto lo harán al más bajo precio. El resultado, para los agricultores, es el endeudamiento: muy pocos ingresos comparados con los gastos. “Los agricultores cobraban más por un kilo de trigo en 1978 que hoy, pero nadie quiere hablar del aumento de los gastos”, señala Schmeiser.

El endeudamiento ha expulsado a muchos agricultores de las praderas de Canadá occidental. Schmeiser divide a los agricultores en tres categorías. Un tercio, incluyéndose asimismo, no tiene deudas por maquinaria o tierras. Otro tercio está endeudado, pero logra sobrevivir. El tercio restante son agricultores endeudados y que ya no logran sobrevivir. Son los que pierden sus tierras. Con cada vez menos

agricultores, la base de conocimientos está en declive, reemplazada por los intereses de las multinacionales que les aconsejan más compras de tecnologías costosas, semillas transgénicas y plaguicidas tóxicos. Aquellos ayudarán a producir mayores cantidades y alimentarán el proceso que hunde aún más los precios que reciben.

La historia es similar en Estados Unidos. Según el Centro de Análisis de Política Agraria de la Universidad de Tennessee, desde finales de los ochenta “la política oficial del gobierno ha sido permitir, incluso apoyar, una caída libre de los precios de los productos agrícolas nacionales mientras promocionan las medidas de apoyo a la apertura de nuevos mercados para los productos de EE UU”. Los precios que los agricultores reciben por los productos agrarios han caído en picado, aproximadamente un 40 por ciento desde 1996, “a veces suministrando a las multinacionales productos vegetales y animales, por debajo del coste de producción, lo que ha consolidado su control sobre la producción y el ciclo completo de la comercialización”. El gobierno está usando el dinero de los contribuyentes para pagar a los productores lo suficiente para apenas cubrir los gastos, subvencionando los cereales baratos. Pero también subvenciona inputs costosos, como las semillas transgénicas patentadas.

Dado el creciente déficit público de EE UU, el gobierno se ve presionado para reducir las ayudas a los agricultores. Según los medios de comunicación, la Administración Bush ha propuesto reducir el presupuesto de agricultura en un 5 por ciento, incluyendo un recorte del 30 por ciento en las ayudas que reciben los agricultores. Sin embargo, la presión de la agroindustria para adquirir cereales y carne a bajo precio no disminuirá, ni su presión sobre los responsables políticos, según Roger McEowen. Al disminuir las ayudas del gobierno, cada vez más agricultores entrarán en el círculo de los contratos contractuales para sobrevivir (como sucede desde hace mucho tiempo en las explotaciones ganaderas de aves y cerdos en Canadá y EE UU).

Los contratos per se no son necesariamente malos, pero los problemas aparecen cuando su consolidación elimina el poder de negociación de la parte más débil, resultando en acuerdos desiguales que fa-

vorecen a las empresas más fuertes. Tal consolidación está bien asentada en la agricultura. En Estados Unidos, por ejemplo, las dos terceras partes de la comercialización de los productos derivados del cerdo son controladas por sólo cuatro compañías, según los datos elaborados por Mary Hendrickson y William Heffernan de la Universidad de Missouri. El poder de las multinacionales es similar en el sector de los cereales. McEowen señala que las únicas oportunidades de mercadotecnia objetivas de los agricultores para su maíz, soja o trigo se ven limitadas a los ascensores de los silos de cereal de Archer Daniels Midland (ADM) o Cargill, las dos empresas mayores harineras de EE UU. ADM es también el mayor procesador de haba de soja de EE UU.

Las restricciones de los contratos también afectan a la financiación de los agricultores. De acuerdo con Neil Harl, las pocas (pero grandes) empresas que monopolizan los diferentes sectores de la agroindustria, a través de filiales y sociedades participadas, pueden ofrecer a los agricultores mejor financiación que los bancos locales. “Es evidente que, a largo plazo, el capital será suministrado junto con otros insumos sobre los que el proveedor tiene un monopolio cada vez mayor”, señala Harl. “La tendencia general es hacia multinacionales que controlan un artículo patentado que el agricultor necesita, generalmente semillas, para combinarlo con otros insumos, como plaguicidas. El poder de la firma que tiene las semillas hoy es mayor, dado que éstas pueden patentarse”.

Monsanto, Pioneer, Cargill y otras multinacionales brindan tales paquetes de financiación ligados a la adquisición de sus productos, pero a petición del agricultor, porque de no hacerlo, sería un tipo de contrato que es ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, los agricultores sufren varias presiones para optar por los contratos combinados. Los vendedores de semillas, plaguicidas y equipos, entre otros, pueden decirles que un contrato tal es lo mejor, o en pocas palabras, la presión tanto de vendedores de insumos como de compradores de sus productos. Algunos agricultores, con problemas financieros, no pueden permitirse comprar insumos, por lo que optan por contratos de producción



Christopher van Es

o comercialización que les ofrecen menor riesgo y un rendimiento garantizado (dependiendo de los términos del contrato, por supuesto). A otros, simplemente, no les gusta la comercialización y ven los contratos como una forma de evitarlo.

Harl enfatiza que los agricultores deben leer bien estos contratos, incluyendo la letra pequeña. Algunos no lo hacen. Percy Schmeiser conoció a un agricultor que había firmado un contrato con una compañía recientemente para proporcionarle la mayoría de sus semillas, y todos los fertilizantes, agroquímicos y combustible. Tras la cosecha, vendió una parte suficiente de ésta a la empresa para pagar el valor del préstamo de los insumos, pensando en vender el resto a otros compradores que brindaban un precio más

alto. Pero el contratista lo llamó para que proporcionara toda su cosecha a la compañía al precio fijado. Éste es un caso más de los muchos agricultores que ceden los derechos de comercializar sus cosechas y pierden todo derecho a decidir a quién venden, e incluso de decidir cómo cultivan el cereal.

Para los agricultores, el mundo se cierra y las opciones desaparecen. Los cultivos transgénicos, por ejemplo, son evidentemente un mal trato en muchos sentidos: los agricultores no pueden guardar las semillas, corren el riesgo de ser demandados si son contaminados, las malas hierbas están desarrollando resistencia a los herbicidas como el glifosato, y mercados importantes pueden desaparecer por el rechazo de los consumidores a los transgénicos. ¿Por qué, entonces, hay tantos que deciden plantarlos en EE UU, Canadá y Argentina?

Para ser competitivos. Los transformadores y comercializadores de cereales y soja quieren comprar la soja, el maíz y el trigo tan barato como sea posible, y en un mundo globalizado, lo mismo lo pueden comprar a Brasil o China como a Canadá o Estados Unidos. Los agricultores responden tratando de competir en volumen, cultivando tanto como sea posible para superar los bajos precios. Y la soja Roundup Ready es fácil de manipular, lo que permite que los agricultores cultiven más hectáreas con la misma cantidad de trabajo y equipo, según el agricultor Troy Roush de Indiana.

“El problema es que sólo hay una cantidad finita de tierra disponible, por lo que se enfrenta a unos agricultores con otros cuando tratamos de alquilar y comprar tierras adicionales”, según Roush. “Lo que solía ser una comunidad unida y floreciente queda reducida y desvertebrada por los conflictos por la tierra”. Cuando uno de los vecinos de Roush llamó a Monsanto y lo acusó de guardar semillas ilegalmente, la compañía entabló una demanda. “Nos costó 400.000 dólares, forzándonos a defendernos de una demanda infundada de Monsanto. Así que la próxima vez que una granja se ponga en venta, no podremos ser tan competitivos. El resultado final es la destrucción de la estructura social de la América rural. Todo porque las multinacionales tienen las patentes sobre la vida”.

La concentración no es un juego

Roger McEowen recomienda algunas soluciones para los males que afligen a la agricultura. Primero, regresar a una política de producir lo que se necesita, de producir solamente lo que es necesario para el mercado. Esto eliminaría costosos excedentes que hundan los precios que reciben los agricultores y despilfarran los recursos naturales que es mejor conservar para las futuras generaciones. Segundo, reemplazar las subvenciones al estilo de la asistencia social por apoyos a los precios que reciben los agricultores. Buena parte de la política agrícola de EE UU antes de su eliminación con una ley de 1996 iba encaminada en esta dirección; el apoyo a los precios actúa como el salario mínimo, estableciendo precios mínimos para los cultivos de los agricultores. A los compradores se les exige legalmente pagar por lo menos

esa cantidad; cuantos más compradores haya, mejores serán los precios que reciban los agricultores.

Según Devlin Kuyek, las 10 multinacionales más importantes de la biotecnología controlan un tercio de las semillas vendidas en todo el mundo; cuatro compañías controlan el 86 por ciento de las semillas de maíz y el 49 por ciento de las semillas de soja. Por esta razón es por lo que Neil Harl piensa que es también crucial hacer cumplir las leyes antimonopolio: “Tenemos una concentración altísima de oferta de insumos y de comercialización de los productos agrarios. Ese es el problema. ¿Este país quiere que los agricultores se transformen en siervos o quiere que los productores sean independientes? Si queremos lo último, entonces debemos trabajar para mantener la competencia... y eso implica reforzar de manera efectiva las políticas antimonopolio”.

Las medidas correctivas o preventivas son necesarias en todo el mundo, porque el control creciente de las multinacionales de la industria de las semillas y la disminución asociada de la tradición de guardarlas no es un problema restringido a Canadá y a Estados Unidos. El mercado mundial de semillas asciende a 23.000 millones de dólares, según Hope Shand del grupo ETC, una ONG canadiense. Está principalmente concentrado en Norteamérica y Europa, y las posibilidades de crecimiento adicional son limitadas. Pero en el Sur, donde viven la inmensa mayoría de los 1.400 millones de personas que dependen de guardar las semillas para la siembra, el mercado podría ser de otros 20.000 millones o una cantidad aún mayor. No es extraño, por tanto, que un gigante de las semillas como Syngenta haya solicitado una patente multi-genoma en 115 países, lo que le daría un poder de monopolio sobre 40 plantas.

Bajo la presión de ETC y otras organizaciones, Syngenta recientemente retiró su demanda. Pero hacer cumplir las leyes de patentes en muchos países en desarrollo, con legislaciones diferentes, no va a ser difícil. Una estrategia más fácil podría ser el control biológico como el Terminator. Esta modificación genética hace que las semillas de segunda generación sean estériles. Los agricultores pueden sembrar semillas Terminator y obtener una cosecha, pero si las guardan y plantan la segunda generación de semillas, no crecerán. Ello haría irrelevantes los contratos y patentes; los agricultores sólo tendrían la opción de tener que comprar nuevas semillas todos los años. (Desde 1998, hay una moratoria mundial de Naciones Unidas sobre tales tecnologías. Canadá trató de romper la moratoria en una reunión de la ONU en febrero en Bangkok, pero sin éxito).

Percy Schmeiser teme por el futuro de la agricultura. “Los agricultores quiebran porque no pueden sobrevivir en un mercado manipulado por las multinacionales, que son los nuevos señores y barones, de los que mis abuelos pensaban que se habían librado”.

Robert Schubert es editor de *CropChoice*, un servicio online que proporciona noticias alternativas y artículos sobre las semillas y cultivos transgénicos, las tendencias y prácticas de la agroindustria, energías renovables y agricultura sostenible.